



Marín, Álvarez-Castellanos, Martínez y Antelo hablan antes de un Pleno. ANTONIO GIL / AGM

Una variable económica asoma en la pugna por la portavocía del Grupo Mixto en la Asamblea

El diputado que ostente el máximo cargo pasará a cobrar al menos 5.000 euros anuales más que el resto

DAVID GÓMEZ
Murcia

La crisis de Vox en la Región ha dinamitado el Grupo Mixto de la Asamblea Regional, en el que convivían tranquilamente los diputados de la coalición Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos. Los dos parlamentarios tienen que compartir espacio, tiem-

po y recursos con José Ángel Antelo y Virginia Martínez, que han recalado allí tras ser expulsado por su grupo, el primero, y abandonarlo la segunda por su desacuerdo con la deriva política del partido.

Las dos facciones mantienen ahora una intensa pugna por el reglamento de funcionamiento interno, tras haber sido incapaces de alcanzar un acuerdo de mínimos y dejar la decisión en manos de la Mesa del Parlamento autonómico. Una batalla en la que la visibilidad política constituye el principal factor en juego, pero que también encierra una variable de tipo económico.

Y es que el diputado que consiga hacerse con la portavocía entrará en

el selecto grupo de los que más cobran en la Cámara regional. El régimen económico aprobado al principio de legislatura establece para los jefes de filas de los grupos parlamentarios una retribución bruta anual de 68.680,36 euros, exactamente la misma cantidad que los vicepresidentes de la Asamblea y solo por debajo de la presidenta, que tiene asignados 76.113,52 euros brutos al año. En definitiva, que los portavoces perciben 16.019,36 euros adicionales (aproximadamente, unos 1.200 más al mes) que un diputado raso, cuyo sueldo es de 52.661 euros. Y 5.206 más (unos 300 mensuales) que los secretarios de la Mesa de la Cámara y los portavoces adjuntos.

El borrador de reglamento, que rechazan tanto Podemos-IU como Antelo, se debatirá el martes en la Junta de Portavoces

Con el borrador de reglamento propuesto por los servicios jurídicos de la Asamblea, el Grupo Mixto contaría con un portavoz titular y dos suplentes (que serían un diputado de cada facción), quedando otro parlamentario como raso. La propuesta, pendiente de aprobación definitiva, plantea establecer turnos rotatorios para la portavocía, en función de la antigüedad en el Grupo Mixto y señalando que no entra en la rueda quien ya hubiera ejercido en esta legislatura, es decir, María Marín. Con esta regla, correspondería a José Luis Álvarez-Castellanos asumir la dirección del Grupo Mixto de forma inmediata, aunque podría renunciar a ello en favor del parlamentario o parlamentaria que él designe, incluida María Marín. Así que uno de los dos podría seguir percibiendo el salario de 68.680,36 euros anuales al menos hasta el 30 de junio, cuando acaba el periodo de sesiones.

Antelo hasta el final

En septiembre, sí o sí, el exlíder regional de Vox José Ángel Antelo se convertirá en la cara visible, puesto que podría ocupar el puesto hasta el final de la legislatura en el caso de que Virginia Martínez, a quien correspondería el turno en el siguiente periodo de sesiones que se inicia en febrero, acceda a cedérselo.

La propuesta de normativa presentada por la Mesa de la Cámara, que rechazan tanto la parte de Podemos-IU como los dos diputados que salieron de Vox, debe tratarse en la próxima reunión de la Junta de Portavoces, que tiene lugar el próximo martes. Un encuentro al que asistirá todavía María Marín, aún como representante del Grupo Mixto, quien ya ha anunciado que su partido dará la batalla, si es necesario, en los tribunales de Justicia.

El Ejecutivo se reúne el lunes en Lorca por el 15 aniversario de los seísmos

D. G. C.
Murcia

El Consejo de Gobierno se reunirá este lunes en Lorca, justo en el día en el que se cumplen quince años de los terremotos que asolaron la ciudad el 11 de mayo de 2011. La reunión del Ejecutivo, que estará presidida por Fernando López Miras, tendrá carácter extraordinario y deliberante. Esto significa que no se llevará ningún acuerdo a aprobar.

El objetivo es hacer un acto simbólico de apoyo institucional a la ciudad y de recuerdo a las víctimas, así como poner a Lorca como ejemplo de colaboración entre la ciudadanía y las administraciones en un proceso de reconstrucción que desde la Comunidad califican de «ejemplar».

La celebración del Consejo de Gobierno extraordinario tendrá lugar en el Palacio del Huerto Ruano, un inmueble del siglo XIX, de estilo ecléctico y BIC, que sufrió importantes daños como consecuencia de los seísmos y fue objeto de una restauración.

El Info moviliza 40 millones de ayudas de I+D+i a empresas en 67 operaciones

LA VERDAD
Murcia

El Instituto de Fomento (Info) contribuyó a canalizar en 2025 un total de 31,4 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), para proyectos de I+D+i en la Región. Esta financiación permitió movilizar 40,2 millones de inversión en 67 operaciones, lo que supone un incremento anual del 29% en el número de proyectos aprobados y del 39,5%, tanto en la aportación del CDTI como en inversión estimada.

Del total de operaciones, 48 corresponden a pymes, 17 a empresas de mayor dimensión y dos a centros tecnológicos, lo que confirma el peso del tejido empresarial en la absorción de estos fondos de innovación. La inversión media por proyecto se situó en 600.000 euros, con una aportación media del CDTI de 468.000 euros, lo que implica una contribución de fondos públicos de aproximadamente ocho de cada diez euros del coste de la inversión.

La Comunidad sigue sin su propia normativa sobre metales en el suelo

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ
Murcia

El Gobierno regional afronta sin una importante herramienta científica y legal el reto de impulsar la descontaminación de terrenos afectados por metales pesados en el antiguo cinturón industrial de Cartagena y en las sierras mineras de Cartagena-La Unión y de Mazarrón, y el de medir con precisión esta carga química en parcelas del sur del Mar Menor, ante los resultados de distintos informes recabados por las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura. El Ejecutivo sigue sin fecha para aprobar la normativa que anunció hace seis años

para «reforzar la seguridad jurídica» necesaria para «lograr» dos objetivos fundamentales. Uno, «que los responsables de la contaminación» saneen los suelos; y dos, «garantizar la protección de la salud de las personas y del medio ambiente».

Estos fueron los dos fines principales que se marcó la Consejería de Medio Ambiente en 2019 cuando inició la tramitación del decreto de establecimiento de los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales pesados y otros elementos traza en los suelos de la Región. Debe definir las concentraciones que no conlleven un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los

ecosistemas. Ello, de acuerdo con un real decreto del año 2005: el de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios para declarar suelos contaminados.

La Región de Murcia está entre el grupo de seis comunidades que carecen de niveles específicos, junto a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana e Islas Canarias, lo que les lleva a guiarse por la legislación estatal, la normativa de alguna autonomía que tenga su propio desarrollo legal o por otras determinaciones científicas. En distintos expedientes, la Comunidad ha aplicado valores calculados por expertos de la Universidad

de Murcia o los que fijó la Comunidad de Andalucía.

Fuentes del Gobierno regional indican a LA VERDAD que la Dirección General de Medio Ambiente trabaja junto a la Universidad de Murcia (UMU) en «el documento final» del decreto, «en base a las alegaciones recibidas por parte de colectivos y colegios profesionales».

Es, alegaron sobre el retraso acumulado, «un proceso complejo desde el punto de vista técnico, con diferencias de criterio científico sobre la formulación de los niveles de fondo». Aseguraron que «el objetivo del Gobierno regional es alcanzar el máximo consenso científico, garantizando que los futuros NGR respondan a criterios rigurosos, sólidos y adaptados al territorio». Y precisaron que superar los NGR «no implica por sí mismo un riesgo, sino la necesidad de determinar el origen» natural o no de los metales y las medidas oportunas.